

De Salvador de La Plaza

Donación de Tierras y Proceso Electoral

(EXCLUSIVO PARA "CLARIN").

La gran prensa ha venido publicando notas informando que el ciudadano Presidente de la República, para fines de Reforma Agraria y por sucesivos Decretos, ha DONADO en estos últimos días al Instituto Agrario Nacional diez fincas de las que por sentencia de la Comisión de Enriquecimiento Ilícito ingresaron al Patrimonio Nacional, así como transferido GRATUITAMENTE al mismo Instituto, en varios Estados, grandes extensiones de terrenos baldíos,



El contenido electorero de tales informaciones salta a la vista, tanto por el empleo del "generoso" verbo DONAR, como por el hecho de que 8 de las 10 fincas anunciadas figuraron ya, para septiembre de 1961, entre las tierras con las que el Instituto Agrario Nacional había dotado los asentamientos campesinos de: "Santa Bárbara", 55.000 Has., Apure; "Chua-Cepe", 3.000 Has. y "Hacienda Zuata", 400 Has., Aragua; "San Juan de Dios", 700 Has., "Agua Blanca", 2.500 Has. y "Alpargatón", 9.000 Has., Carabobo; "Lomas del Viento", 2.200 Has., Cojedes y "Prdo Verde", 140 Has., Mérida, conforme a los datos registrados en la Encuesta Oficial sobre evaluación de la Reforma Agraria que realizó y publicó hace dos años la Comisión Integrada por representantes del IAN, BAP, MAC y Cordiplán.

"Regalar" tierras a través de grandes titulares de la prensa para asegurarse votos en las elecciones, es una táctica que por "obsoleta" —para usar el adjetivo puesto de moda— parecía ya no sería empleada más. Sin embargo, el "humanista" recién Secretario de la Presidencia no lo ha estimado así y apareció la gran noticia: "400 HECTÁREAS PARA REFORMA AGRARIA EN EL TIGRE". "El Presidente Betancourt firmó un Decreto por el que se transfirieron GRATUITAMENTE al Instituto Agrario Nacional, 400 hectáreas a los fines de la Reforma Agraria, según informó al terminar el Consejo de Ministros el Secretario General de la Presidencia, Don Mariano Picón Salas" (7/9).

No se percató el Secretario que con esa y otras informaciones aparecidas en la prensa, lo que estaba haciendo era confirmar que en cuanto a Reforma Agraria, el Ejecutivo y sus órganos dependientes no habían dado cumplimiento a la Ley de Reforma Agraria, a sus disposiciones esenciales, sino que han estado frenando, retardando su realización, pues no otra explicación podría darse al hecho de que sea hasta ahora, en vísperas de las elecciones, que naciera la preocupación por entregar unas tierras que desde el mismo 6 de marzo de 1960 en que fue promulgada la Ley de Reforma Agraria, por imperio de la misma, ya pertenecían a los campesinos que en ella estaban habitando o trabajando. En efecto, la Ley dedica el Capítulo I del Título I a "Las Tierras de las Entidades Públicas" y a establecer el uso que de ellas debe hacerse, disponiendo: "Las tierras de las Entidades Públicas (Art. 10) quedan AFECTADAS a los fines de la Reforma Agraria; a estos efectos, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes es-

peciales, se consideran como tales:

- a) —Las tierras baldías,
- b) —Los fundos rústicos del dominio privado de la Nación,
- c) —Los fundos rústicos pertenecientes a los Institutos Autónomos Nacionales,
- d) —Los inmuebles rurales que pasen al Patrimonio Nacional, en razón y como consecuencia de enriquecimiento ilícito contra la cosa pública.

"Quedan también afectadas a la Reforma Agraria (Art. 11) las tierras pertenecientes a los Estados y Municipalidades y a los establecimientos públicos de estas Entidades. En consecuencia, el Ejecutivo Nacional celebrará los convenios que al respecto fueren necesarios", y

"Los inmuebles rurales AFECTADOS conforme al presente Capítulo (Art. 18), pertenecientes o administrados por la Nación, serán TRANSFERIDOS GRATUITAMENTE al Instituto Agrario Nacional, quien queda especialmente autorizado al efecto, no siendo necesaria la

autorización del Congreso Nacional u otro órgano del Poder Público para realizar dicha transferencia. Previo los correspondientes convenios, se dará igual destinación a los bienes rurales económicamente explotables de las demás Entidades y establecimientos públicos (Estados y Municipalidades)".

Por manera pues, que el Ejecutivo no hace una "merced", por no ser potestativo de él, cuando llena la formalidad de firmar los respectivos transferimientos de propiedad al IAN, pues por la Ley todas esas tierras no sólo quedaron AFECTADAS desde el mismo 6 de marzo de 1960 a los fines de la Reforma Agraria e implícito el consiguiente transferencia de ellas al IAN, sino que de inmediato debían ser dotadas, con entrega real, a los campesinos que en ellas estuvieren habitando o trabajando, en cumplimiento de lo que al respecto establece el aparte b) — del Art. 2: "Esta Ley garantiza el derecho de todo individuo o grupo de población aptos para trabajos agrícolas o pecuarios que carezcan de tierras o las posean en cantidades insuficientes a ser dotados en propiedad de tierras económicamente explotables, preferentemente en los lugares donde trabajan o habitan, o cuando las circunstancias lo aconsejen, en zonas debidamente seleccionadas y dentro de los límites y normas que establezca la Ley".

Muy concreto y definido es, pues el derecho a ser dotados de tierra que la Ley garantiza a los campesinos y en cuanto a

aquellos que estén habitando o trabajando en tierras afectadas de Entidades Públicas, a que en ellas se les hubiere dotado desde que la Ley fue promulgada.

Poco o nada se ganaría con denunciar y protestar contra el ventajismo electorero que implica las informaciones, ofrecimientos de dotaciones, entrega de papeles timbrados, etc, si los campesinos continúan ignorando cuáles son sus derechos. Por lo que la forma de contrarrestar esas maniobras, es llevar a los campesinos, por una parte el conocimiento de los derechos que les garantiza la Ley de Reforma Agraria y, por la otra al convencimiento de que no se les hace gracia o merced si se les dota de tierra, a fin de que no incurran en mercadear su voto por algo que les pertenece y que si aún no poseen en propiedad, es por culpa de ellos mismos y principalmente de las organizaciones en las que han estado agrupados, que no han sabido o querido hacer valer esos derechos.

El volumen de votos que representa el campesinado es, sin que exageremos, decisivo en los resultados del cómputo, porque hasta el campo no llega la proliferación de candidatos que divide al electorado en los centros urbanos y la macolla latifundista - imperialista, por disponer del aparato del Estado, tiene todas las de hacer pesar la votación a su favor por medio de la intimidación, el chantaje, los ofrecimientos y demás maquinaciones de todo orden de que puede valerse, incluso, de la

compra de "oradores" que se autodenominan "líderes del campesinado", para arrastrar y engañar a los campesinos. En el teje maneje de la politiquería, en auge en este como en todos los demás países sub-desarrollados y también en los desarrollados que se estila en los procesos electorales, en los que muchos candorosamente ven una especie de panacea que cura todos los males sociales y políticos, nada puede ya extrañar.

Por eso insistimos en que para cortar las garras de ese ventajismo, la forma que debe emplearse, a más de la compactación de las fuerzas progresistas, es la de divulgar, hacer conocer, popularizar entre los campesinos las disposiciones de la Ley de Reforma Agraria que les garantizan sus derechos, el derecho a ser dotados de tierra, el de recibir créditos oportuna y en cantidad suficiente, el de mercadeo de sus producciones, el de asistencia, etc., a fin de que estén menos proclives a caer en los lazos o trampas que les tienden para birlarles el voto. Con ese objetivo es que hemos reproducido en esta nota algunas disposiciones de la Ley de Reforma Agraria. En otra ocasión comentaremos las relativas a las tierras de propiedad particular, recalando por ahora que el aparte b) del Art. 2, transcrito arriba, rige también para estas tierras, aunque en cuanto para dotar con las mismas a los campesinos, tenga el IAN que proceder a su adquisición por venta voluntaria que le hacen sus dueños o por expropiación.